

Expte. n° QTS 32351/2022-1 “GCBA s/  
QUEJA POR RECURSO DE  
INCONSTITUCIONALIDAD  
DENEGADO en COTO CENTRO  
INTEGRAL DE COMERCIALIZACIÓN  
S.A CONTRA GCBA SOBRE HABEAS  
DATA”

**Vistos:** los autos indicados en el epígrafe.

**Resulta:**

1. Llegan estos autos al Tribunal a efectos de resolver el recurso de queja interpuesto por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (en adelante: GCBA) contra la decisión de la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo que denegó su recurso de inconstitucionalidad.

2. Las actuaciones se suscitaron con la demanda promovida, en los términos de la ley 1845, por Coto Centro Integral de Comercialización SA (en adelante, Coto CICSA) contra el GCBA con el objeto de que se le ordenara rectificar los datos de las personas que resultaban ser sujetos pasivos del impuesto automotor correspondiente a diversos vehículos que habían sido enajenados por la empresa. A este respecto, solicitó que se declarara que Coto CICSA no resultaba ser deudora del tributo citado desde la fecha en que se había informado a la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (en lo sucesivo, AGIP) las respectivas denuncias de venta.

Argumentó que la circunstancia de que la AGIP mantuviera la identificación de Coto CICSA como contribuyente del tributo, a pesar de que debería haber registrado la baja de la compañía en tal carácter, no resultaba inocua. Ello así, por cuanto el sistema informático de la AGIP informaba, además, la existencia de deuda impaga de las patentes correspondientes a todos esos vehículos, lo que generaba el riesgo de que la Administración pretendiera reclamar el pago de esas obligaciones insatisfechas por parte del deudor consignado en el sistema.

En ese contexto, requirió el dictado de una medida cautelar que ordenara a la demandada abstenerse —durante el curso de este proceso— de realizar acto alguno tendiente al reclamo o ejecución de diferencias tributarias pretendidas en concepto de impuesto sobre los automotores, respecto de los vehículos individualizados en la demanda, con posterioridad a la fecha en que se comunicó su enajenación.

3. Al contestar el traslado de la acción iniciada, el GCBA solicitó su rechazo.

4. La magistrada de grado hizo lugar parcialmente a la acción de protección de datos y, en consecuencia, ordenó a la demandada rectificar —en el término de cinco (5) días— los datos respecto de los dominios EKY695, GWP270, HHG666, JZN321, MIC247, SXD544 y 099KCY. La rechazó, en cambio, con relación a los dominios AIA921, AVQ452, CYA351, DKS436, DKS437, EKM871, EVF716, EYF449, EYF450, EYF452, FDO122, FBK507, FBK511, FKE054, HZW548, IAE411, JJV828, KCT601, KDW779, KTC378, VUL452, VWX461 y 526BVP restantes. Finalmente, impuso las costas por su orden (ver pronunciamiento de fecha 15/09/2022).

Para ello, tuvo en cuenta que: i) del informe provisto por la propia AGIP del que surgía que: (a) respecto de los dominios DKS436, DKS437, KCT601, EVF716, AVQ452, KDW77 (sic, aunque de la demanda surge que es KDW779), GWP279 (en la demanda se identifica como GWP270), VWX461, KTC378, IAE411, 526BVP, FKE054, AIA921, VUL452, FBK507, EKM871, JJV828, EYF452, FDO122, HZW548 y FBK511, el registro —conforme el informe provisto por la propia AGIP— se encontraba actualizado en tanto indicaba que se habían dado de baja las patentes señaladas y (b) en relación al dominio EYF449, el titular registrado en AGIP era “Rueda Vanesa Adriana” y no la actora; ii) del informe del Registro de la Propiedad automotor se desprendía que la actora continuaba registrada como titular de los dominios EYF450 y CYA351; iii) resultaba claro que los registros de la AGIP en los que constaba que Coto CICSA aún figuraba como “titular” en relación a los dominios HHG666, JZN321, SXD544, 099KCY, MIC247, EKY695 eran inexactos y debían ser actualizados; y que si bien el GCBA no había acompañado en autos informe de AGIP del vehículo con patente GWP270, surgía del informe de dominio agregado a la causa que el titular de dicho dominio no era Coto CICSA.

5. Contra esa sentencia se alzaron ambas partes y los agravios fueron contestados por sus respectivas contrarias.

A su turno, la Cámara de Apelaciones resolvió hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la parte actora. Así, modificó la sentencia de grado en cuanto había rechazado la presente acción respecto de los dominios AIA921, VUL452, EYF450 y CYA351 y le ordenó rectificar los datos de las personas que registraba como sujeto pasivo del gravamen de patentes de tales automotores. A su vez, rechazó el recurso de apelación del GCBA y le impuso las costas a dicha parte (ver pronunciamiento de fecha 29/11/2022).

Para así decidir, y tras compartir —en lo sustancial— el dictamen fiscal sostuvo que: i) no existían motivos razonables que justificaran la reticencia de la AGIP en sustituir al sujeto obligado al pago del tributo por los dominios AIA921, VUL452, EYF450 y CYA351 desde la fecha de sus respectivas denuncias de venta (en las que, según surgía de los informes agregados a la causa, ellas contenían los datos exigidos por la normativa fiscal), desligando a

partir de entonces al titular transmitente; ii) los dominios HHG666, JZN321, SXD544, 099KCY, MIC247 y EKY695 se encontraban inscriptos ante la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad Automotor bajo un nuevo propietario y la transferencia vehicular debidamente inscripta, por lo que había tenido el efecto de producir la extinción del hecho imponible de allí en adelante; y iii) el GCBA no había aportado elementos concretos que fundamentaran la imposibilidad de cumplimiento de la manda judicial en el plazo de cinco (5) días conferido en la sentencia de grado.

6. Disconforme con la solución adoptada, el GCBA planteó recurso de inconstitucionalidad.

En su presentación esgrimió que: i) la sentencia atacada sufría de serios defectos de fundamentación y razonamiento, en tanto resultaba contraria a la legislación vigente en la materia y por ende resultaba arbitraria; ii) lo decidido afectaba la obligación de su parte de llevar adelante un sistema registral confiable, veraz y eficiente, acorde a la normativa fiscal vigente; iii) su parte había detallado pormenorizadamente el estado fiscal de los rodados HHG666, JZN321, 099KCY, MIC247 y EKY695 indicando, en cada caso, las deudas existentes sobre tales rodados, correspondientes a períodos anteriores a las respectivas transferencias de dominio; por lo que al no contar con los datos del nuevo titular por haber cambiado de radicación y sus adquirentes no ser contribuyentes de esta Ciudad, las deudas —que efectivamente eran de responsabilidad de Coto CICSA— quedaban en “un limbo insondable”; de manera que cuando Coto CICSA abone lo que adeuda, el rodado quedará con sus cuentas en cero en esta jurisdicción; iv) lo registrado por su parte era información exacta, veraz y expresaba una deuda legítima que no afectaba a los nuevos adquirentes, ni generaba nuevas deudas a la actora; de modo que ningún perjuicio se le causaba al actor; v) para que procediera la baja de la responsabilidad tributaria deberá indicarse en la denuncia de venta ante el DNRPA los datos que individualicen al adquirente, fecha y lugar de celebración de la operación; lo que no se daba respecto de los rodados AIA921, VUL452, CYA351 y EYF450; y vi) los jueces dejaron de lado la normativa aplicable (arts. 421, 422 y 424 del Código Fiscal), sin declarar su inconstitucionalidad y sin argumentos que justificaran el apartamiento.

Calificó el pronunciamiento recurrido de arbitrario y violatorio del debido proceso, de la protección de datos, de la propiedad y de los principios de legalidad y congruencia.

7. Una vez contestado el traslado pertinente por la parte actora, la Sala II denegó el recurso de inconstitucionalidad del GCBA con sustento en la ausencia de caso constitucional y de sentencia arbitraria (ver pronunciamiento de fecha 28/02/2023).

Ello motivó la queja referida en el punto 1.

8. Requerido su dictamen, el Fiscal General Adjunto propició el rechazo de la queja articulada por el GCBA.

### **Fundamentos:**

#### **La jueza Alicia E. C. Ruiz dijo:**

1. Corresponde rechazar la queja que interpusiera el GCBA toda vez que no satisface la carga de fundamentación que prescribe el artículo 33 de la ley n° 402.

2. Es requisito necesario del recurso directo que contenga una crítica concreta, desarrollada y fundada del auto denegatorio del recurso de inconstitucionalidad ([“Fantuzzi, José Roberto y otro s/ art. 57 bis —causa n° 665-CC/2000— s/ queja por denegación de recurso de inconstitucionalidad”](#), expediente n° 865, resolución del 09/04/2001, entre otros). Y, este recaudo no se verifica en autos.

3. Es oportuno recordar que la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario denegó el recurso de inconstitucionalidad del GCBA con apoyo en las razones que siguen:

i) los agravios esgrimidos quedaron circunscriptos a la interpretación de cuestiones de hecho y prueba; y

ii) el recurrente no demostró la concurrencia de una cuestión constitucional que registre una relación concreta entre los fundamentos del pronunciamiento que se pretende controvertir y los preceptos invocados.

El *a quo* descartó, también, la causal arbitrariedad de la sentencia invocada por la demandada.

4. Los argumentos mencionados en el apartado anterior no fueron refutados por el quejoso.

La lectura de la presentación directa permite advertir que los dichos del GCBA no superan el nivel de una mera discrepancia, no fueron acompañados de una exposición seria que los justifiquen o respalden y no constituyen —en mérito de lo señalado— una crítica suficiente en los términos que exige el artículo 33 de la ley n° 402.

5. Por ello, voto por rechazar la queja del GCBA.

#### **Las juezas Inés M. Weinberg y Marcela De Langhe dijeron:**

1. La queja deducida por el GCBA no logra poner en crisis los fundamentos por los cuales la alzada denegó su recurso de inconstitucionalidad: ausencia de caso constitucional y de sentencia arbitraria.

2. En efecto, las objeciones del GCBA giran en torno a determinar, entre otras cosas, si los datos informados en el sistema respecto de los rodados EKY695, GWP270, HHG666, JZN321, MIC247, SXD544, 099KCY, AIA921, VUL452, EYF450 y CYA351 eran correctos; si la actora había formulado la correspondiente denuncia de venta ante el Registro Automotor respecto de los vehículos identificados bajo los dominios AIA921, VUL452, EYF450 y CYA351, con expresa indicación de las fechas de entrega y denuncia y los datos vinculados a sus respectivos adquirentes, tal como lo requería el artículo 375 del Código Fiscal; y si los automotores identificados bajo los dominios EKY695, GWP270, HHG666, JZN321, MIC247, SXD544, 099KCY se hallaban actualmente bajo la titularidad de la actora. Pero ello remite al examen de la valoración de los hechos, las pruebas (informes de la AGIP y del DNRPA) y la interpretación de normativa infraconstitucional (ley 1845, Código Fiscal t.o. 2021, decreto-ley 1114/97) tenidos en cuenta por la alzada para decidir del modo en que lo hizo. Y sabido es que la revisión de todos estos aspectos resultan extraños —como principio— a esta instancia extraordinaria, ya que no importan desentrañar la inteligencia de cláusula constitucional alguna.

Lo antes apuntado priva a los preceptos constitucionales (debido proceso, protección de datos, propiedad y principios de legalidad y congruencia) que el GCBA dice afectados, de la necesaria e inmediata relación que debe existir entre ellos y los fundamentos de la solución adoptada por la Cámara de Apelaciones.

3. En cuanto a la arbitrariedad que el GCBA le endilga a lo resuelto por la alzada, lo cierto es que las consideraciones que formula no logran desbaratar las premisas que sustentaron el pronunciamiento atacado.

Los agravios de la parte recurrente —además de ser reiteración de los vertidos en anteriores oportunidades— sólo ponen en evidencia su disconformidad con la solución alcanzada en tanto le fue desfavorable, pero ello no resulta suficiente para considerar que los jueces de la alzada incurrieron en un error grosero susceptible de descalificar a la sentencia en cuanto acto jurisdiccional válido.

4. En tales condiciones, corresponde el rechazo de la queja intentada por el GCBA.

**Así lo votamos.**

**El juez Luis Francisco Lozano dijo:**

1. La parte actora ha aprovechado la acción de habeas data que prevé la ley 1845 para discutir la condición de sujeto pasivo de la obligación de patentes que el fisco le acordaba respecto de los dominios que se indican el punto 4 de las “Resulta”.

En palabras de los jueces de mérito, “... solicita que se declare que [...] no resulta ser [...] deudora del tributo citado, desde la fecha en que informó al Fisco las respectivas denuncias de venta...” (cf. la pág. 1 de la Actuación n° 2522516/2022, a la que remite la sentencia de la Cámara).

Las partes, y los jueces, de modo conteste, han entendido que ese fue el objeto de la demanda.

2. Ni las partes, ni los jueces entendieron que esa acción sea inconducente para trabar una discusión de la especie reseñada: establecer cuál es el alcance de las denuncias de venta realizadas por COTO respecto de los mencionados dominios y su efecto a los fines de la obligación de tributar “patentes sobre vehículos” (en adelante, también, “patentes”).

Ciertamente, han desvirtuado con ello la acción de habeas data.

3. Empecemos por repasar la decisión que viene cuestionada y los planteos de la parte recurrente.

A esta altura del proceso, el GCBA sólo viene discutiendo la decisión que le ordena “rectificar” “... los datos de las personas que registra [la AGIP] como sujeto pasivo del gravamen de patentes...” de los siguientes dominios: AIA921, VUL452, EYF450, CYA351, HHC666, JZN321, 099KCY, MIC247 y EKY695.

3.1. El GCBA viene explicando que no ha dado de baja a COTO como contribuyente de los primeros cuatro dominios (AIA921, VUL452, EYF450 y CYA351) porque no han sido transferidos, y las denuncias de ventas formuladas no reúnen los requisitos para tenerlo por eximido de la responsabilidad de pago por esas patentes.

Con relación a los restantes cinco dominios, el GCBA señala que ha dado de baja a COTO de modo provisorio, condición que surge de las constancias agregadas a la causa sin que medie debate a su respecto. Dice que ello responde a que registran deuda anterior a que COTO transfiriese el dominio de esos vehículos y fueran radicados en otras jurisdicciones. Una vez saldada esa deuda, se da de baja de modo definitivo al obligado, siempre según los agravios que trae el GCBA.

3.2. La Cámara entendió que acreditada la transferencia de domino y/o la existencia de denuncias de venta correspondía hacer lugar a la rectificación solicitada.

En palabras de la Cámara, “... no existen motivos razonables que justifiquen la reticencia de la AGIP en sustituir al sujeto obligado al pago del tributo por los dominios AIA921, VUL452, EYF450 y CYA desde la fecha de sus respectivas denuncias de venta, desligando a partir de entonces al titular transmitente” (cf. la pág. 8 del dictamen al que remitió el *a quo*).

Por su parte, el *a quo* ordenó a la AGIP dar de baja a COTO de los dominios en que aparecía con baja “provisoria”. Dijo que “... la transferencia vehicular debidamente inscripta ante la DNRPA tuvo el efecto de producir la

extinción del hecho imponible de allí en adelante, lo que debe ser receptado en las bases de datos de la AGIP...” (cf. la pág. 9 del mencionado dictamen).

4. Vayamos al régimen de habeas data.

El art. 1 de la ley 1845 establece que la ley tiene por objeto regular “... el tratamiento de datos personales referidos a personas físicas o de existencia ideal...”.

Qué se entiende por datos personales viene definido por el art. 3 de la ley. “Datos personales: Información de cualquier tipo referida a personas físicas o de existencia ideal, determinadas o determinables”.

Datos personales entonces es igual a “información” personal.

5. Ahora bien, la presente acción no tuvo por objeto obtener la rectificación de una información referida a COTO. Por ejemplo, COTO no pidió que se corrigiera una base que erradamente lo consignara como empresa extrajera. De haber sido ese el supuesto, COTO estaría solicitando la rectificación de una información personal, su nacionalidad. Bastaría con corroborar el dato cuestionado con la información personal suministrada para hacer lugar a la demanda.

La presente acción tuvo por objeto cuestionar los alcances de varias relaciones jurídicas, las que unen al fisco con la empresa demandante con relación a los mencionados dominios.

La procedencia de la demanda no dependió de corroborar un dato consignado en una base con una información personal de COTO. La decisión recurrida opera efectos sobre el ordenamiento jurídico. Implica tener por nulos los actos de la AGIP que tienen a COTO por responsable del pago de las patentes por los mencionados dominios.

6. El habeas data es insuficiente a esos fines. No es una acción de impugnación. El hecho de que opere sobre la información personal justamente impide acordarle el alcance que le vienen dando en este pleito los jueces de mérito.

Si la parte pretende discutir los alcances de una relación jurídica, como lo son las tributarias que nos ocupan, las vías que prevé el ordenamiento jurídico son, en principio, la impugnativa o la repetición —cf. mi voto *in re*: [“Herrero, María Cristina c/ GCBA s/ amparo \(art. 14 CCABA\) s/ recurso de inconstitucionalidad concedido”](#), expte. n° 9904/13, sentencia del 22/12/2014—. Allí señalé que las acciones fiscales tienen que ser planteadas de acuerdo a las reglas que mandan observar las leyes especiales que regulan los procedimientos a los que están sujetas esas obligaciones.

La CSJN misma ha recordado esa regla en el año 2014 en la sentencia en la causa “Carlos E. Enriquez S.A. y otros U.T.E. c/ AFIP – DGI s/ acción meramente declarativa” (expte. nro. C. 211. XLVIII), del 25 de febrero de 2014; donde entendió improcedente la vía de la acción declarativa de certeza (cf. el art. 322 del CPCCN) para instalar un debate acerca de los alcances de una

relación jurídica tributaria (IVA períodos 2004 a 2006) cuya realización está sujeto a reglas procesales específicas, las de la ley 11.683.

Pero, así como esas vías resultan inconducentes cuando se trata de requerir información personal, solicitar su rectificación, supresión, etc. (donde, por hipótesis, es decir, por personal, no se discuten los alcances de una relación jurídica), el habeas data lo es cuando se pretende, como en el caso, remover un acto del fisco que se estima no ajustado a derecho.

7. Veamos las inconsistencias a las que arriba la sentencia de la Cámara como consecuencia de haber resuelto como lo hizo en el marco de un habeas data.

La Cámara entendió que estaba resolviendo una mera confrontación entre los informado por la DNRPA y lo registrado en las bases del Fisco; sin embargo, no se ocupó siquiera de explicar por qué eso sería así cuando lo discutido no es la registración de un dato personal, sino, como dije, los alcances de una relación tributaria que, por implicancias necesarias, supone como mínimo a dos personas: fisco y deudor por deuda propia. Prueba indubitable de ello lo constituye el hecho de que la decisión recurrida se fundó en la interpretación del CF to 2021 y lo previsto en el art. 27 del Régimen Jurídico del Automotor, aprobado por el decreto 1114/97 (cuestión esta última sobre la que vuelvo más abajo), y no en base a información personal del accionante.

7.1. Primeramente, la decisión recurrida reviso actos administrativos, aquellos de los que daban cuenta los registros del Fisco, que tenían a COTO como responsable del pago de patentes por los dominios discutidos, sin que se hubiera instado un procedimiento y luego un proceso judicial que lo posibilitara.

7.2. Se avanzó sobre el ejercicio de funciones administrativas, las que hizo la AGIP, sin siquiera darle ocasión de que revisara su obrar. Dicho en otras palabras, no se agotó la vía administrativa, no obstante haberse revisado el ejercicio de competencias propias que hizo otra rama de poder del estado.

7.3. La titularidad a que se refieren las bases del Fisco no tiene por objeto establecer quién es el dueño del vehículo de que se trate. Ello viene definido por los registros de la DNRPA.

Lo que hace el Fisco es identificar quién es, en su interpretación, el o los obligados al pago del tributo (los sujetos pasivos), en el caso, patentes vehiculares.

Esa o esas personas perduran en esa condición hasta que obtienen la “baja fiscal pertinente” (cf. el art. 421 del CF to 2021, que fue a aquel sobre el que los jueces vienen resolviendo el pleito).

El fisco informó que respecto de los dominios: HHC666, JZN321, 099KCY, MIC247 y EKY695 había acordado a COTO una baja provisoria porque registraban deuda impaga.



COTO podría haber discutido la existencia de la apuntada deuda, pagar y obtener la baja, decir que la deuda se generó con posterioridad a que hubiera operado la transferencia de dominio, etc. No hizo nada de eso.

Los jueces mandaron a rectificar la “baja provisoria” porque entendieron que no era coincidente con el informado por la DNRPA. Sin embargo, la DNRPA lo único que informó fue que esos dominios habían sido radicados en otras jurisdicciones.

Así planteada es una discusión de sordos. El Fisco viene diciendo que la baja fiscal depende, entre otros, de no registrar deuda, y la parte actora sostiene que la postura del Fisco (plasmada en sus registros) no es coincidente con la registración que, a otros fines, ha hecho otro órgano, la DNRPA.

Aunque se hubiera planteado el debate como una confrontación de información personal, en verdad, lo que se hizo fue revisar, sin dar razones fundadas para ello, la interpretación que viene haciendo el Fisco de las relaciones jurídica que tiene trabadas con COTO a propósito de los dominios reseñados.

7.4. La Cámara entendió, respecto de los demás dominios discutidos, que llevaba automáticamente a la baja como contribuyente el hecho de que COTO hubiera hecho denuncias de venta.

Eso como vimos no es así. Por ejemplo, puede registrar deuda y eso impide que opere la baja que el a quo entendió automática.

Pero, además, no cualquier denuncia de venta conlleva la baja fiscal, y esto es lo que viene argumentado el GCBA. El titular dominial se “... exime de su responsabilidad tributaria, cuando consign[a] [en la denuncia de venta] los datos que individualicen al adquirente del vehículo y la fecha y lugar en que formalizó la compraventa del bien registrable” (cf. el art. 422 del CF to 2021). El GCBA recurrente sostiene que las denuncias de venta en cuestión no reunían esos requisitos.

Ello no fue analizado por los jueces de mérito. Hacerlo ciertamente excedería en mucho lo que puede ser materia de discusión en un habeas data. Obsérvese que la resolución de ese debate no depende de confrontar un dato personal de COTO, sino de analizar el contenido de las denuncias de venta y la postura del fisco al respecto.

7.4.1. Un párrafo aparte merece la mención que la Cámara hizo del párrafo del art. 27 del Régimen Jurídico del Automotor. Dijo: “... huelga señalar que en el orden nacional el artículo 27 del Régimen Jurídico del Automotor aprobado por el Decreto-Ley [SIC: rectus: decreto] N° 1114/97 prescribe que ‘(...) los registros seccionales del lugar de radicación del vehículo notificarán a las distintas reparticiones oficiales provinciales y/o municipales la denuncia de la tradición del automotor, a fin de que procedan a la sustitución del sujeto obligado al tributo (patente, impuestos, multas, etcétera) desde la fecha de la denuncia, desligando a partir de la misma al titular transmitente”’ (cf. la pág. 9 del dictamen fiscal ante la Cámara).

Esa regla, incorporada por la ley 25.232 en el citado régimen, fue cuestionada ante la CSJN por la provincia de Entre Ríos (cf. la sentencia de la CSJN publicada en Fallos: 331:1412). La CSJN hizo lugar a la demanda disponiendo lo siguiente: “Hacer lugar a la demanda seguida por la Provincia de Entre Ríos contra el Estado Nacional y declarar la inconstitucionalidad de la ley 25.232”. Entendió que la regla legal cuestionada avanzaba sobre facultades locales, al regular quién debe ser caracterizado como sujeto pasivo de una obligación tributaria local. En el considerando 7° de la sentencia se lee: “... dentro de la esfera autónoma del derecho financiero local, las provincias gozan de las más amplias facultades para gravar las entidades jurídicas tal como las crea el derecho sustantivo nacional y sobre esta base, no puede la ley 25.232 impedir optar por el cobro del tributo provincial al dueño del automóvil, a su poseedor en tal carácter, o a ambos conjuntamente. Una solución contraria importaría tanto como desnaturalizar el equilibrio y la armonía con que deben operar los poderes federales con los provinciales, en desmedro de estos últimos (Fallos: 286:301)”.

De ahí que la jurisdicción local pueda establecer qué requisitos debe reunir la denuncia de venta para que produzca los efectos tributarios que ella estime correspondan, y no sea esa una cuestión cuya competencia para resolver competa al estado federal.

8. Por ello, habiendo dictaminado el Fiscal General Adjunto, voto por hacer lugar a la queja y al recurso de inconstitucionalidad, revocar la sentencia de la Cámara y rechazar la demanda en cuanto fue materia de agravio.

Las costas del proceso se imponen por su orden, y las del recurso a la vencida.

Por ello, de acuerdo con lo dictaminado por el Fiscal General Adjunto, por mayoría,

**el Tribunal Superior de Justicia  
resuelve:**

**1. Rechazar** la queja interpuesta por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

**2. Mandar** que se registre, se notifique y, oportunamente, se remita a la Sala interviniente para que sea agregada a los autos principales.

El juez Santiago Otamendi no suscribe la resolución por estar en uso de licencia.

La sentencia se dicta en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

